

PERSPECTIVA CONTABLE DE LA ACTUALIZACION DE BALANCES ESTABLECIDA POR EL R. D.-LEY 7/1996

Gemma HERNANDO MOLINER

Departamento de Administración de Empresas
Universidad de Cantabria

RESUMEN: En este artículo se reflexiona sobre las cuestiones más significativas de la última actualización de balances aprobada en nuestro país según Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, centrándose prioritariamente en los aspectos contables. Para ello, se examina la posición adoptada respecto a sus principales aspectos en las anteriores medidas de regularización y actualización en nuestro país, así como en los países de la Unión Europea. Considerando las pretensiones de esta medida fiscal de trascendencia contable se analizan y enjuician los principales efectos de su adopción en la información contable de las empresas.

ABSTRACT: This article examines all relevant aspects of the last discounting passed in Spain, to study in depth only one side -countable side- to the question. On the basis of the aims provided by this fiscal and countable measure, the more important effects on the accounting of the company are analyzed.

PALABRAS CLAVE: Actualización, regularización, revalorización, precio de adquisición, corrección monetaria.

1. INTRODUCCION

El principio del precio de adquisición, que desde siempre ha sido objeto de debate, fue nuevamente cuestionado (Cea García, 1990), al incluirse con carácter obligatorio en nuestra actual normativa contable, donde el fin último es reflejar la imagen fiel de la situación económica y financiera de la unidad económica.

Sin duda, la existencia de inflación y su no consideración en las Cuentas anuales, distorsiona la verdadera imagen fiel que se pretende ofrezca la información contable. Por una parte, al valorarse los activos por su precio histórico de adquisición o coste histórico de producción, y las deudas por su valor de reembolso, los distintos elementos patrimoniales contenidos en el Balance de situación aparecen valorados en unidades monetarias de distinto poder adquisitivo, no representando la riqueza actual o real de la empresa. Igualmente, tampoco la Cuenta de pérdidas y ganancias refleja la renta realmente obtenida, y ello por dos razones básicas. En primer lugar, ciertos

gastos, tales como las amortizaciones, son calculados aplicando procedimientos basados en el valor histórico; y en segundo lugar, los resultados obtenidos por enajenación del inmovilizado se determinan por diferencia entre el precio de venta y el valor neto contable del bien; esto es, el precio de adquisición minorado por las amortizaciones practicadas cuando el bien fuera amortizable. Ambas circunstancias dan lugar a que se ofrezca un beneficio nominal superior al real en la Cuenta de pérdidas y ganancias.

Este problema contable trasciende al ámbito fiscal, en tanto la cuota tributaria por el Impuesto sobre Sociedades se determina tomando como punto de partida el beneficio contable antes de impuestos, y no habiéndose establecido en la vigente Ley del Impuesto sobre Sociedades ningún tipo de corrección monetaria para las situaciones mencionadas.

Si bien se han desarrollado diversas propuestas teóricas de contabilidad para la inflación; en la práctica, la solución aplicable en nuestro país ha sido la actualización de valores del balance mediante las distintas leyes de regularización y actualización de balances que eventualmente han sido aprobadas.

En el análisis del tema que nos ocupa, conviene diferenciar los conceptos de regularización, actualización y revalorización de balances. El concepto de "regularización de balances" es un concepto más amplio que los otros dos, supone adecuar la valoración contable a la realidad por lo que incluye además de la actualización de valores del balance, la incorporación de elementos patrimoniales no registrados en contabilidad y la eliminación en libros de los pasivos inexistentes. Estas operaciones están explícitamente excluidas en la vigente Ley de actualización. El concepto de "actualización de balances" conlleva ajustar los valores de las partidas del balance a su valor actual. Este ajuste puede evidenciar una minusvalía o una plusvalía caso de la revalorización- y debiera abarcar a todos los elementos del balance. Sin embargo, en la presente actualización de balances sólo se contempla el caso de actualizar revalorizando y, además, sólo afecta a ciertas partidas del activo del balance, por lo que estamos de acuerdo con Carazo (1997) al afirmar que la denominación más exacta es la de "revalorización de algunas partidas del balance". En resumen, la actualización implica una corrección sólo cuantitativa, mientras que en la regularización dicha corrección es cuantitativa y cualitativa.

De todas formas, la regularización y la actualización de balances, como medidas fiscales con concreción contable que son, han sido adoptadas en España desde 1961 en nueve ocasiones (incluida la actual de 1996 y sin considerar la aprobada en 1990 por las Diputaciones forales vascas), si bien con matices distintos en cada caso. En particular, la Ley de actualización de balances de 1996 ha sido muy demandada desde diversos sectores -especialmente desde el sector empresarial- ante el importante proceso inflacionista habido durante los últimos años y, habida cuenta que la ley anterior de actualización de valores fue en 1983.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA LEY DE ACTUALIZACIÓN DE BALANCES DE 1996: ASPECTOS COMUNES Y SINGULARES RESPECTO A LEYES ANTERIORES

Para enjuiciar la actualización de balances de 1996 se examinan los cuatro aspectos fundamentales en cualquier medida de este tipo: Su finalidad, su ámbito de aplicación, el proceso de actualización definido y su fiscalidad. Para ello, se compara el contenido de tales aspectos en la presente actualización con el correspondiente a políticas anteriores de regularización y actualización de balances aprobadas en nuestro país.

Previamente, es preciso destacar la voluntariedad que caracteriza la vigente actualización; lo cual, si bien es un rasgo tradicional en esta medida, refuerza la dificultad para sostener que con esta práctica pueda llegar a ofrecerse, en todos los casos empresariales (donde se ha podido revalorizar o no "dentro de la legalidad"), la verdadera imagen fiel de la unidad económica.

a) Finalidad.

El Real Decreto Ley 7/1996 sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica, expone las siguientes ventajas para las empresas que se acojan a la norma de actualización que contiene: Conocer sus costes reales de producción, determinar más exactamente su beneficio y potenciar la financiación interna de las mismas elevando, por tanto, su capacidad de acceso al mercado de capitales.

Por lo tanto, en concordancia con normas de actualización anteriores se mantienen tres finalidades en la presente actualización: En primer lugar, el ajuste de los diferentes elementos patrimoniales a un valor actualizado, lo cual incrementa formalmente los recursos propios de las empresas -su grado de autonomía financiera- mediante el reconocimiento de las plusvalías generadas en la cuenta de reserva por revalorización. En segundo lugar, la determinación más adecuada de los costes reales de las empresas, a lo cual contribuye la vigente actualización mediante la equiparación teórica entre el coste de amortización calculado sobre el valor actualizado de los bienes y el coste de amortización practicado sobre el valor de reposición de los mismos. El ajuste conseguido en dichos costes dará lugar a una reducción del beneficio contable y fiscal en las empresas, conectando así con el último de los fines de esta medida: la corrección de los resultados reconocidos por enajenación de bienes de activo fijo. Teóricamente, al actualizar el valor de los bienes objeto de estas operaciones, se eliminará de este resultado la parte del mismo que corresponda a variaciones puramente monetarias por aumento en el nivel general de precios.

Las anteriores tres finalidades han estado presentes en todas las anteriores medidas de regularización y actualización en nuestro país. Sin embargo, en algunas de ellas (las de 1961, 1964, 1973 y 1977) se añadía o se autorizaba exclusivamente, la posibilidad de que aflorasen elementos patrimoniales ocultos y se eliminasen partidas ficticias de los balances, al objeto de que éstos reflejasen la imagen fiel de la situación

patrimonial de las empresas. Precisamente, esta posibilidad de actuación es la que define la regularización patrimonial propiamente dicha y la diferencia de la actualización de balances.

b) Ambito de aplicación.

b.1. Ambito subjetivo: Pueden acogerse a la actualización las entidades que sean sujetos del Impuesto sobre sociedades, las pertenecientes a grupos de sociedades (pueden practicar la actualización de forma individual) y las sociedades civiles, herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades en régimen de atribución de rentas. Tales entidades deberán llevar su contabilidad de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio o con lo establecido en las normas por las que se rigen. También pueden actualizar aquellas sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que realicen actividades empresariales o profesionales (pueden ejercitar la actualización de forma independiente para cada una de sus actividades). La inclusión de estos últimos representa una destacable novedad. Dichas personas físicas deben llevar su contabilidad de acuerdo con el Código de Comercio (si realizan actividades profesionales), o llevar los libros registros debidamente diligenciados (si realizan actividades empresariales sin carácter mercantil o realizan actividades profesionales).

b.2. Ambito objetivo: La presente actualización se refiere necesariamente a la totalidad de los elementos patrimoniales susceptibles de la misma. Son susceptibles de actualizarse: Los elementos patrimoniales del inmovilizado material situados tanto en España como en el extranjero, los elementos patrimoniales adquiridos en régimen de arrendamiento financiero, así como los solares y terrenos de empresas inmobiliarias. En el caso de sujetos pasivos por obligación real de contribuir mediante establecimiento permanente, los elementos patrimoniales deberán estar afectos a dicho establecimiento permanente.

Respecto a esta característica, puede observarse bastante diferenciación de unas actualizaciones a otras en razón de los activos que abarca y del lugar en que deben situarse los bienes. Así, las actualizaciones de valores de los años 1979 (para bienes en territorio español), 1980 (para bienes situados en el extranjero) y 1981 (para bienes situados tanto en España como en el extranjero) se refirieron exclusivamente al inmovilizado material con carácter general; mientras que las normas de actualización de los años 1961, 1964, 1973 y 1983 abarcaron el inmovilizado material situado en España y los valores mobiliarios de renta variable.

Por lo tanto, en cuanto al ámbito objetivo, es destacable en la normativa actual, la incorporación de los elementos adquiridos en régimen de arrendamiento financiero y, de parte de las existencias de las empresas inmobiliarias (solares y terrenos).

c) Proceso de actualización.

Las anteriores normas de actualización de balances de nuestro ordenamiento tributario han utilizado dos procedimientos de actualización: El basado en los coeficientes de corrección monetaria y el basado en los precios o valores de mercado. La primera de tales técnicas fue aplicada a todos los bienes de inmovilizado material, a excepción hecha de los bienes de activo fijo situados en el extranjero, actualizables en 1980 y 1981, a los que fue aplicado el criterio de precio de mercado. Este último criterio fue también empleado en la actualización de los valores mobiliarios de renta variable, en los casos en que su actualización fue posible.

Siguiendo en la misma línea, la norma de actualización de 1996, incorpora como única técnica de actualización la basada en los coeficientes de corrección monetaria, siendo su procedimiento general de aplicación similar al contenido en normativas previas.

En este sentido, el reglamento (art. 6) contiene la tabla de coeficientes aplicables en la actualización con carácter de máximos, la cual es la misma que la incorporada en la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. Los coeficientes aspiran a corregir los efectos de la inflación actuando sobre los valores históricos de los bienes, por lo que han de ser representativos de la depreciación monetaria experimentada por los bienes actualizables. A la vista de la tabla de coeficientes aprobada en la presente normativa y, dado que el período de referencia ha sido altamente inflacionario, cabe cuestionarse la suficiencia de dichos coeficientes.

La actualización mediante los coeficientes de corrección monetaria se consigue mediante la aplicación de los mismos al valor contable -precio de adquisición o coste de producción- de los bienes en función del año de adquisición o producción; y, a las amortizaciones fiscalmente deducibles -o como mínimo las que debieron realizarse con dicho carácter- atendiendo al año en que se dotaron. Los coeficientes podrán aplicarse elemento por elemento o, por grupos homogéneos de elementos o por instalaciones complejas especializadas, siempre que se hayan tratado contablemente como un conjunto a efectos de amortización.

Como se ha señalado, este procedimiento general de aplicación de los coeficientes vigentes coincide con el de leyes de actualización anteriores, excepto por lo que se refiere a la naturaleza fiscal de las amortizaciones en lugar de considerar las mismas en el ámbito contable.

Entre los casos especiales de aplicación de los coeficientes según la vigente Ley de actualización, cabe destacar el caso de los elementos contenidos en el primer balance cerrado con posterioridad al 31 de diciembre de 1983, en el que los coeficientes se aplicarán sobre el valor de los bienes en dicho balance, atendiendo al año de cierre del mismo; y, sobre las respectivas amortizaciones acumuladas en el mismo balance más las efectuadas posteriormente siempre que fueran fiscalmente

deducibles. En consecuencia, la presente actualización es una actualización limitada, por cuanto parte de la última fecha en que fue posible la actualización en nuestro país y así, al igual que sucediera en la actualización de 1983, la relación aprobada de coeficientes enlaza con la de la actualización precedente. En consecuencia, las empresas que no hubieran actualizado entonces o con las leyes anteriores, la aplicación de la presente normativa no les supondrá una revalorización efectiva de sus elementos patrimoniales.

Por otra parte, la normativa para la actualización de balances de 1996, introduce una importante novedad frente a las anteriores, en las cuales la plusvalía de actualización del bien se obtenía por diferencia entre el valor neto contable histórico y el valor neto contable actualizado por aplicación directa de los correspondientes coeficientes. En la presente normativa se incorpora con carácter obligatorio, la realización de una corrección reductora sobre dicha diferencia -incremento neto de valor obtenido por aplicación de los coeficientes- en función de la forma de financiación del sujeto pasivo. De este modo, se atiende a la diferente incidencia de la depreciación monetaria sobre el patrimonio en razón a la composición de las fuentes de financiación de la empresa; es decir, se tiene en cuenta el efecto endeudamiento, la procedencia de los recursos financieros que han hecho posible la consecución de los activos. Pensemos que, si tales recursos financieros son ajenos, la empresa habrá obtenido un beneficio de la inflación igual a la diferencia entre el incremento de valor de sus bienes y los intereses satisfechos a los prestamistas.

El incremento neto de valor obtenido tras la corrección reductora correspondiente por financiación ajena, se abonará a la cuenta "Reserva de revalorización Real Decreto-Ley 7/1996 de 7 de junio" con cargo a las cuentas de cada uno de los elementos patrimoniales actualizados, sin que el importe de la correspondiente amortización acumulada contabilizada sufra variación alguna.

La reducción por financiación ajena en la presente actualización, ha sido establecido en los mismos términos que lo hiciera la Ley 43/1995 del Impuesto sobre Sociedades (art. 15.11) siendo su justificación la recogida en dicha Ley. Se puede optar por dos procedimientos para determinar la reducción del incremento neto: Reducir en un 40 por 100, o bien reducir el porcentaje resultante de restar de 100 el resultado de multiplicar por 100 el coeficiente determinado al dividir los fondos propios entre el pasivo total menos los derechos de crédito y la tesorería.

La ausencia de un mecanismo que considerase el efecto endeudamiento en la actualización fue criticado desde hace años, reforzando con ello las objeciones hechas a la solución de las actualizaciones esporádicas mediante coeficientes para corregir los "defectos" del principio de precio de adquisición (Cea, 1990).

El límite al valor actualizado del bien es el valor de mercado, por lo que si existiera un exceso de valor, éste deberá corregirse contablemente cargando su importe en la cuenta de "Reserva de revalorización" con abono a la cuenta del activo revalorizado.

En resumen, la citada cuenta de revalorización representará la plusvalía que corresponde al incremento neto de valor de los elementos patrimoniales actualizados conforme al procedimiento descrito; integrándose en los fondos propios del balance de la entidad. Dicha cuenta no podrá tener, en ningún caso, saldo deudor, ni en relación al conjunto de las operaciones de actualización, ni en relación a la actualización de algún elemento patrimonial. La incorporación de las operaciones de actualización -registradas contablemente en el Libro Diario- al balance que se tome como base para la misma, dará lugar al balance actualizado que deberá ser aprobado por el órgano competente cuando se trate de personas jurídicas.

Por último, enlazando con el siguiente apartado, es conveniente destacar que la aplicación de una técnica de actualización u otra -coeficientes de corrección monetaria o precios de mercado- no implica sólo un procedimiento distinto de revalorización; sino que, como indican Castellano y Pereira (1990), suponen diferentes filosofías en cuanto a la amplitud del incentivo fiscal que quiera establecerse. Téngase en cuenta que el nuevo valor actualizado por aplicación de coeficientes no se ha de ajustar necesariamente al valor de mercado del bien; por lo que, aún cuando se hubiera actualizado, si el bien es enajenado puede obtenerse una plusvalía que tributaría en el Impuesto sobre Sociedades. Sin embargo, el criterio de precio de mercado en la actualización, eliminaría la posible plusvalía real que el bien hubiera acumulado en caso de venta.

d) Fiscalidad.

El coste fiscal en la presente actualización se concreta en un gravamen único sobre el saldo de la cuenta de actualización del 3 por 100, justificado en la norma por cuanto contribuye a garantizar el adecuado control de la operación de actualización. Por lo tanto, el importe abonado en la cuenta "Reserva de revalorización" no se integrará en la base imponible del Impuesto sobre sociedades ni del Impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Por otra parte, los valores actualizados de los elementos patrimoniales tienen plenos efectos fiscales y, en consecuencia, se tomarán como base para las amortizaciones futuras y como valor histórico de adquisición o de producción a fin de determinar las rentas derivadas de transmisiones futuras. De esta forma, la razón de ser de dicho gravamen único de actualización no es otra que compensar los beneficios fiscales futuros que, al menos en teoría, conlleva la actualización.

En cuanto a la contabilización de este gravamen único de actualización tiene la consideración, no de gasto fiscalmente deducible, sino de deuda tributaria; por lo que su importe se cargará en la cuenta "Reserva de revalorización" con abono a la cuenta "Hacienda Pública acreedora".

El balance actualizado deberá incluirse en la declaración -de Impuesto sobre Sociedades o de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas- del período impositivo correspondiente. La no presentación, o presentación fuera de plazo de dicha declaración, será causa invalidante de las operaciones de actualización realizadas.

Por último, si observamos las leyes de regularización y actualización anteriores se comprueba que la fiscalidad de esta medida ha sido bastante distinta en los casos que existió regularización propiamente dicha, no así en los casos exclusivos de actualización.

En las regularizaciones de los años 1961y 1964 se aplicaron varios tipos de gravamen: Un gravamen por la afloración de los elementos patrimoniales ocultos y la eliminación de pérdidas ficticias; dos tipos de gravamen por las operaciones propias de actualización, uno sobre los bienes financiados con recursos propios y recursos ajenos a corto plazo y otro sobre los bienes financiados con recursos ajenos a largo plazo; y, un último tipo de gravamen por la capitalización de la cuenta de regularización resultante. En la regularización del año 1973 únicamente existió un tipo de gravamen sobre la actualización de los bienes financiados con deuda a largo plazo. Finalmente, en las posteriores ocasiones en que fue aprobada esta medida no se incluyó ningún tipo de gravamen; permaneciendo exentos a efectos del Impuesto sobre sociedades, los incrementos de valor resultantes de las operaciones de actualización y regularización.

En consecuencia, el gravamen único de la vigente actualización, que tiene el carácter de un auténtico impuesto, representa un coste fiscal en la adopción de esta medida al cual las empresas que revalorizaron sus activos en ocasiones anteriores no estaban acostumbradas. Ello sin duda pesará negativamente en la decisión a adoptar por las empresas; y en particular, puede ser uno de los principales factores que afecten a la baja respuesta que previsiblemente se observe en la pequeña y mediana empresa.

3. PANORAMA DE LA ACTUALIZACION DE BALANCES EN PAISES DE LA UNION EUROPEA

La normativa comunitaria en materia de actualización de balances, se cife a los artículos 32 y 33 de la Cuarta Directiva de 25 de julio de 1978; a la cual, todos los estados miembros -excepto Finlandia- de la Unión Europea (UE) tienen armonizada su legislación mercantil. Dichos artículos establecen que, como norma general la valoración de las partidas de las Cuentas Anuales se basará en el principio del precio de adquisición o del coste de producción; si bien, excepcionalmente y hasta que se lleve a cabo una coordinación posterior, los Estados miembros podrán declarar a la Comisión que se reservan la facultad de autorizar o imponer para todas o algunas sociedades, lo siguiente:

- La valoración sobre la base del valor de reposición de las inmovilizaciones materiales cuya utilización tenga un límite temporal, así como en las existencias.
- La valoración de las partidas que figuran en las cuentas anuales, incluidos los capitales propios, sobre la base de otros métodos distintos a los previstos en el punto anterior y destinados a considerar la inflación.
- La revalorización de las inmovilizaciones materiales y de las inmovilizaciones financieras.

En tales casos, los Estados miembros de la UE deberán incluir en la legislación al efecto: el contenido, los límites y las modalidades de aplicación de los criterios de valoración. De aplicarse uno de dichos criterios, la memoria deberá contener la información oportuna sobre ello (método de valoración, partidas afectadas). Asimismo, el importe de las diferencias de valoración resultantes -entre el valor a precio de adquisición o coste de producción histórico y el nuevo valor calculado conforme a uno de tales criterios- se inscribirán en el pasivo del balance como "Reserva de revalorización".

Según la Cuarta Directiva comunitaria, cabe interpretar que únicamente aquellos Estados miembros que hubieran suscrito el pacto de reserva -declaración a la Comisión de su reserva a la aplicación plena de contabilizar siempre a precio de adquisición- establecido en el artículo 33, pueden autorizar los supuestos señalados en el mismo artículo. Sin embargo, en la práctica ello no ha sido así y algunos países -entre ellos España- han aprobado leyes especiales de actualización de balances sin haber suscrito en su momento dicho pacto de reserva.

Asimismo, interesa destacar que dicha norma comunitaria no permite la afloración de elementos patrimoniales ocultos y la eliminación de partidas ficticias; esto es, la regularización patrimonial propiamente dicha. De esta forma, los Estados miembros de la UE pueden aprobar leyes de actualización de balances o adoptar otras medidas que persigan los mismos fines (potenciación de los recursos propios, corrección de las plusvalías por enajenación de bienes y determinación más adecuada de los costes reales). Así, tales técnicas alternativas, cuya aplicación es recomendable que se haga de forma conjunta, han sido en algunos países -no sólo de la UE-, las siguientes: Permitir la deducción fiscal de la mayoría de provisiones, de fondos de previsión para financiar inversiones futuras o de inversiones ya realizadas o en período de instalación; indiciar las plusvalías generadas en la enajenación en función de la fecha de adquisición del bien vendido; y, autorizar amortizaciones aceleradas y libertad de amortización.

Ahora bien, en los países que han optado por mitigar los efectos de la inflación en la contabilidad empresarial mediante leyes especiales de actualización de balances (entre ellos España); puede observarse que, en ausencia durante mucho tiempo de una actualización de valores, algunas empresas optan por aplicar otras medidas fiscales que formalmente responden a otros fines pero que permiten alcanzar beneficios similares a los ofrecidos por la actualización de balances. En concreto, en nuestro país, desde la anterior actualización -en 1983- se han venido utilizando varias vías como alternativa a la actualización de valores (Castellano y Pereira, 1990):

- a) A fin de potenciar los recursos propios, la vía utilizada -obligatoria en algunas empresas y voluntaria en otras- ha sido el régimen fiscal que regula los procesos de fusión y escisión; el cual permite valorar a precios de mercado los elementos patrimoniales que se integren con escaso coste fiscal (en el Impuesto de Sociedades existen bonificaciones sobre el incremento de valor de los bienes en los balances de fusión).

- b) En relación con la determinación más adecuada del flujo de costes reales, las medidas fiscales alternativas en la práctica han sido: La adquisición de los bienes de inmovilizado mediante contratos de arrendamiento financiero; y, el ajuste de las amortizaciones a un plan formulado por las empresas y aprobado por la Administración cuando ello sea posible (los elementos de inmovilizado amortizables deben estar sometidos a una depreciación técnica o económica distinta a la amortización según tablas fiscales, por causas permanentes en el desarrollo de su actividad).
- c) Por lo que se refiere a las plusvalías por la venta de bienes de activo, las empresas españolas han utilizado básicamente dos vías para evitar el coste fiscal de dichas plusvalías, sobre todo en aquellos casos en los que el valor histórico era muy inferior al valor de mercado del bien. Una solución ha sido la reinversión en bienes de análoga naturaleza y destino del importe total obtenido en la venta de inmovilizado material necesario para la actividad empresarial. En este caso el incremento patrimonial por la transmisión de inmovilizado no era gravado. Una segunda vía, utilizada hasta 1989, ha sido la venta de los derechos de suscripción por los accionistas a un nuevo socio que suscribía la totalidad de la ampliación de capital, haciéndose con el control de la sociedad y, en consecuencia, del inmueble. Hasta dicha fecha el importe de la venta de los derechos de suscripción no estaba sujeto al Impuesto sobre la Renta, descontándose sólo del coste de los títulos poseídos.

De acuerdo con el estudio comparado realizado por Esteban Marina (1996) la situación actual en materia de actualización de balances en los países que forman parte de la UE, puede sintetizarse en:

- A. Estados de la UE que emplean técnicas alternativas a la actualización de balances como las señaladas en un principio.
 - A.1. Naciones que no permiten la revalorización de activos ya sea por una prohibición expresa (caso de Holanda) o porque la aplicación del principio de prudencia valorativa la hace inviable (casos de Alemania y Austria).
 - A.2. Naciones que permiten la "actualización contable" sin efectos fiscales: Gran Bretaña, Irlanda y Finlandia. En estos países, la cuenta de actualización es indisponible y nunca con carácter de reserva societaria. Desde el punto de vista fiscal, las amortizaciones deducibles y las plusvalías por enajenación de bienes se calculan en función de costes históricos; existiendo en algunos casos libertad de amortización para los equipos industriales y exención de mínimos en plusvalías de enajenación.
 - A.3. Nación que permite revalorizaciones de activos siempre que la diferencia entre el valor actual -asimilado al valor de mercado- y el coste de adquisición es definitiva y permanente: Suecia.

- A.4. Naciones que incluyen la posibilidad de revalorizar activos en su normativa pero que hasta la fecha no han puesto en práctica esta medida: Luxemburgo y Dinamarca.
- B. Estados de la UE con leyes especiales de actualización de balances. En estos casos, los países autorizan, de forma esporádica, la revalorización de activos mediante una disposición específica. En este grupo se incluye Francia como principal impulsor teórico de esta medida y pionera en su aplicación; y, las naciones cuya doctrina contable se ve influida por dicho país: España, Bélgica, Portugal, Italia y Grecia. Refiriéndonos sólo a los aspectos diferenciales entre España y el resto de naciones incluidas en este grupo, cabe resaltar que:
 - España es el país que en más ocasiones ha autorizado la actualización y la regularización de balances.
 - Las posibilidades de distribución de la cuenta de actualización y el gravamen aplicado a la misma es distinto en cada país. En todos los países las actualizaciones han estado gravadas, a excepción hecha de la actualización española de 1983 y la autorizada en 1990 en el País Vasco.
 - Los bienes que pueden actualizarse varían: Todos los elementos patrimoniales (primeras actualizaciones de Italia), todos o algunos elementos de activo fijo (Portugal, la última actualización autorizada en Italia), el inmovilizado material y financiero (Francia, Bélgica), o algunos elementos de inmovilizado material (Grecia).
 - La técnica de actualización empleada, en la mayoría de países de la UE así como en Estados Unidos y en países que gravitan sobre su órbita contable, ha sido el ajuste a valores de mercado, a excepción de Portugal que ha aplicado unos coeficientes correctores de la depreciación monetaria.
 - En todos los países de este grupo, las amortizaciones fiscalmente deducibles se calculan sobre valores actualizados, excepto en Bélgica que se hace sobre valores históricos. En todos los casos, las plusvalías por enajenación se calculan a partir del coste histórico; excepto en las primeras actualizaciones italianas y bajo ciertas condiciones en las últimas, que se hace o a partir de los valores revaluados.

4. ANALISIS COSTE-BENEFICIO DE LA ACTUALIZACION DE BALANCES DE 1996 EN LAS EMPRESAS

El hecho de que la presente actualización de balances en nuestro país, al igual que las anteriores, sea voluntaria, implica que las empresas deberían apoyar su decisión sobre ello en un análisis coste-beneficio que evalúe las ventajas potenciales y los inconvenientes de adoptar esta medida en su caso concreto. Es decir, no todas las empresas se pueden ver igual de favorecidas por esta medida, por lo que en cada caso, es recomendable que: Primero, se identifiquen los efectos de todo tipo (contable, fiscal, mercantil, etc.) que reportaría la operación de revalorización. Segundo, se

analicen y valoren conjuntamente dichos efectos a la luz de la estrategia implantada en la entidad. Finalmente, se tome la decisión más conveniente en función de la valoración anterior.

A continuación se exponen, sin ánimo exhaustivo, las ventajas y los inconvenientes que se derivan para las empresas y personas físicas que decidan acogerse a la presente actualización.

1. Beneficios y ventajas que otorga la vigente actualización de balances:

- Los valores contables de los bienes de activo se aproximan a los valores de mercado superiores al valor histórico. En consecuencia, los costes de amortización calculados sobre la base del nuevo valor del bien serán más reales -de mayor importe-, lo que fiscalmente implica una menor carga fiscal futura ya sea en el Impuesto sobre Sociedades o en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Asimismo, las plusvalías generadas por enajenación de bienes actualizados disminuirán, y con ello, la tributación asociada a las mismas.
- El incremento de las dotaciones futuras para amortizaciones potenciará la autofinanciación de mantenimiento en las empresas; y, la incorporación de la "Reserva de revalorización" en el balance, aumentará el peso relativo de los fondos propios. En consecuencia, se obtendrá una mejor imagen patrimonial de la empresa, e igualmente, mejorará la capacidad crediticia de la empresa.
- En situaciones de reducción obligatoria de capital o de disolución obligatoria de la sociedad, tales acciones se pueden evitar al aplicar la actualización de balances.
- La distribución del saldo de la cuenta de actualización originará el derecho a deducción por doble imposición de dividendos.

2. Costes e inconvenientes que ocasiona la vigente actualización:

- El principal inconveniente es el coste fiscal inmediato del 3 por ciento sobre el saldo de la cuenta de actualización.
- El hecho de que las cuotas de amortización sean mayores implicará que: En las empresas con resultados positivos, el beneficio futuro susceptible de reparto se va a ver reducido, afectando a la política de dividendos futura de la entidad; y, en las empresas con pérdidas habituales éstas se verán incrementadas.
- Desde el punto de vista contable, esta práctica no está admitida por las Normas Internacionales de Contabilidad, por lo que las empresas que deban presentar sus cuentas anuales en el extranjero se verán obligadas a realizar modificaciones.
- El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas ha contestado, con fecha 20 de diciembre de 1996, a una consulta sobre la incidencia del mayor valor teórico contable derivado de la actualización de balances en la provisión por depreciación de la cartera de valores que una sociedad matriz pudiera tener

dotada respecto a una filial que actualiza; pronunciándose por el criterio de que dicho mayor valor teórico contable puede dar lugar a una reversión de la citada provisión por depreciación, con el consiguiente efecto en los resultados y en la base imponible del ejercicio.

- La aplicación de esta medida es muy probable que origine nuevas contingencias fiscales. Por ejemplo, el procedimiento de amortización fiscal del nuevo valor actualizado en los ejercicios futuros (art. 11 del reglamento) diferencia entre el valor del bien previo a la actualización -se amortizará fiscalmente tal como se venía haciendo con anterioridad- y el incremento neto de valor del mismo. A este último valor se aplicará el porcentaje resultante de dividir la amortización contable -amortización efectiva- practicada en cada período impositivo entre el valor neto contable del activo previo a la actualización. Por otra parte, el procedimiento de amortización contable deberá mantenerse por aplicación del principio de uniformidad. En consecuencia, surgirán discrepancias entre contabilidad y fiscalidad que darán lugar a los oportunos ajustes en relación al Impuesto sobre Sociedades.

- Desde el punto de vista fiscal, hay que añadir que la actualización incidirá en la tributación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y en el Impuesto sobre el Patrimonio, aumentando la cuota tributaria de los socios por ambos impuestos.

- La actualización del balance modificará la composición del activo, por lo que puede llevar a situaciones de transparencia fiscal sobrevenida o de aplicabilidad del artículo 108 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores.

Observando las anteriores ventajas e inconvenientes derivadas de la actualización de balances y, habida cuenta las condiciones (económico-financieras, fiscales, etc.) particulares presentes en cada caso y las soluciones alternativas existentes para algunas de las ventajas señaladas, es fácil darse cuenta que el análisis comparado de tales ventajas e inconvenientes no será un sencillo cálculo de coste contra ahorro fiscal.

Por lo tanto, es difícil establecer una clasificación somera de empresas favorables a la actualización, dada la diversidad de factores a considerar. En general, puede señalarse el sector inmobiliario como el más proclive a la actualización, por cuanto en este caso es susceptible de revalorizarse parte de su activo circulante, concretamente los terrenos y solares, incluidos los incorporados a construcciones realizadas o en curso. Entre los casos menos favorecidos por la actualización podemos citar las empresas con pérdidas o en aquellas otras cuyo activo fijo amortizable a muy largo plazo tenga un peso relativo preponderante. En ambos casos, el potencial ahorro fiscal vía amortizaciones futuras y considerando el efecto financiero, no compensa el gravamen inicialmente satisfecho del 3 por ciento.

5. CONCLUSIONES

Atendiendo a lo expuesto en este texto, sintetizamos a continuación las características y novedades más significativas de la presente actualización de balances, así como las distintas reflexiones que se han ido poniendo de manifiesto sobre la misma.

- Al margen de consideraciones de otra índole, desde un punto de vista contable, la aprobación de la Ley de actualización de balances de 1996 está justificada, si tenemos en cuenta el desfase existente entre los valores contables y valores reales de los elementos patrimoniales en la contabilidad empresarial, y ello por dos razones principalmente: En primer lugar, el tiempo transcurrido desde la última actualización permitida -en 1983- ha sido un período de fuertes subidas en los precios, especialmente en determinados bienes inmuebles. En segundo lugar, en 1983 se aprobó una actualización incompleta -se partió únicamente del valor contable a 31 de diciembre de 1980 al que fueron aplicados los coeficientes correspondientes para su actualización hasta 1983- por lo que las muchas empresas que no actualizaron en 1981 sólo pudieron realizar en 1983 una actualización limitada.

- La vigente Ley de actualización de balances llega tarde. En nuestra opinión, las razones anteriormente apuntadas ya se manifestaban en 1990; fecha en que tuvo lugar la reforma mercantil en nuestro país, y por tanto, un momento oportuno para que la Administración aprobara ya entonces una medida de este tipo.

- La actualización de balances no es, en nuestra opinión, una solución contable "completa" al deterioro de la información contable por la inflación; en tanto su carácter voluntario -junto a otras de sus características- permite dudar de que con ello se pueda llegar a reconstituir la imagen fiel en la contabilidad de todas de todas las empresas.

- La presente actualización es una norma fiscal de alcance contable. En sentido estricto, se trata de una revalorización de algunos activos del balance, por lo que no se pueden reconocer minusvalías. Este hecho refuerza nuestra opinión anterior y, puede incidir negativamente en la respuesta de las empresas frente a la actualización.

Esta norma de carácter fiscal impone una serie de obligaciones contables que afectan al balance, a la memoria y a las cuentas consolidadas; que en nuestra opinión resultan innecesarias, en tanto el Plan General de Contabilidad y el Código de Comercio ya establecen la información específica a facilitar en los casos de actualización de balances.

- La presente actualización aplica la técnica de actualización de los coeficientes correctores de la depreciación monetaria. Esta técnica ya ha sido empleada en otras ocasiones en nuestro país. Sin embargo, en torno a ella cabe establecer las siguientes objeciones:

En primer lugar, la corrección de valores de los activos basada en un conjunto de coeficientes temporales, ajenos a los verdaderos valores de mercado de los activos, mantiene la objeción anteriormente apuntada en torno a la validez de esta medida como reestructuradora de la imagen fiel de las Cuentas Anuales. Además, la elección del

método de coeficientes frente al de precios de mercado, reduce el incentivo fiscal para que las empresas se acojan a la actualización.

En segundo lugar, en la presente actualización la tabla de coeficientes enlaza con la publicada en la actualización precedente. Los valores actualizables son los presentados en el balance de 1983, independientemente de que se hubieran revaluado o no en dicho año y en las fechas de actualizaciones anteriores. Es decir, se trata de una actualización parcial o limitada, cuando hubiera sido recomendable -dadas las razones señaladas en la justificación de esta medida- una actualización completa.

Además, respecto a la tabla actualmente aprobada cabe cuestionarse si los coeficientes que contiene son suficientes o exiguos, a tenor de la inflación habida en estos últimos años. En nuestra opinión, dichos coeficientes son insuficientes.

Por último, resaltar que este procedimiento de actualización no existe ni en la normativa ni en la práctica de la mayoría de países de la UE, como tampoco en Estados Unidos y en los países que gravitan sobre su órbita contable. En consecuencia, cabe pensar que, habida cuenta la tendencia a la armonización de nuestra normativa contable a las Directivas comunitarias y la creciente internacionalización de nuestras empresas, es deseable que las futuras actualizaciones aprobadas en nuestro país sean estrictamente normas fiscales de repercusiones exclusivamente fiscales.

- Siguiendo con el procedimiento de actualización empleado en la actualización vigente, cabe destacar una importante novedad: La consideración de la procedencia de los recursos financieros que han permitido conseguir los bienes actualizables, mediante un coeficiente corrector del incremento de valor de los bienes actualizados y del correspondiente a los fondos de amortización. En nuestra opinión, la posición del legislador en 1996 respecto a la incidencia de la financiación ajena en la actualización de balances, es más apropiada que la que se observó en algunas actualizaciones precedentes en las que se establecieron gravámenes sobre las plusvalías correspondientes a los activos financiados con fondos ajenos.

- La presente actualización está sometida a un gravamen del 3 por ciento del saldo de la cuenta de actualización. Esta característica no existía en las actualizaciones autorizadas en nuestro país desde 1973. Sin duda, la existencia de este coste fiscal para las empresas, al que no estaban habituadas, es muy posible que incida negativamente en la respuesta de las empresas españolas a la vigente actualización.

Adoptar una postura defensora o crítica a la existencia del citado gravamen estará siempre basada en criterios subjetivos de índole económica y política que no discutiremos aquí. Simplemente, dejar constancia de que en los países de la UE, desde que se aprobara la Cuarta Directiva comunitaria, el criterio imperante ha sido gravar -en la mayoría de los casos con gravámenes más elevados que el nuestro- todas las actualizaciones que se han autorizado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Broto Rubio, J. (1992): La actualización de balances, garantía contable para el mantenimiento del capital, *Técnica Contable*, núm. 518, págs. 73-82.
- Carazo González, I. (1997): Aspectos contables sobre la actualización de balances, *Revista de Contabilidad y Tributación*, núm. 167, págs. 109-140.
- Castellano Real, F. y Pereira Rodríguez, J. J. (1990): Regularización de balances: experiencia y significado, *Partida Doble*, núm. 4, págs. 19-23.
- Cea García, J. L. (1990): Las Cuentas Anuales y la imagen fiel, *Partida Doble*, núm. 4, págs. 24-31.
- Cubillo Valverde, C. y Fernández Peña, E. (1974): *Regularización de Balances*, Ediciones ICE, Madrid.
- Esteban Marina, A. (1996): Actualización de balances, *Revista de Contabilidad y Tributación*, núm. 164, págs. 47-86.
- Ley 10/1996, de 18 de diciembre, de medidas fiscales urgentes de corrección de la doble imposición interna intersocietaria y sobre incentivos a la internacionalización de las empresas.
- Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica.
- Real Decreto 2607/1996, de 20 de diciembre, por el que se aprueban las Normas para la actualización de Balances.
- Orden de 8 de enero de 1997 por la que se aprueba el modelo de declaración-liquidación del gravamen único de actualización (Mod. 208).